Mandatos del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

REFERENCIA: UA VEN 9/2016:

2 de agosto de 2016

Excelencia:

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); de conformidad con la resolución 25/2 del Consejo de Derechos Humanos y el artículo 18 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido, quisiéramos llamar la atención urgente del Gobierno de su Excelencia a la información recibida sobre **presuntas restricciones ilegítimas al ejercicio del periodismo y funcionamiento de los medios de comunicación social** incluyendo alegaciones relativas a **la detención arbitraria de periodistas y ciudadanos por cobertura y difusión de información, agresiones a periodistas por parte de grupos civiles armados, ataques a sedes de medios de comunicación, censura a medios de comunicación, escasez de papel de prensa y problemas en los procedimientos para la renovación de licencias del usufructo de las frecuencias para la radiodifusión.**

De acuerdo con la información recibida:

Detenciones arbitrarias de periodistas y ciudadanos por cobertura y difusión de información

Durante 2016 se habrían registrado varias detenciones arbitrarias, interrogatorios y confiscación de equipos de periodistas, trabajadores de medios y ciudadanos durante la cobertura o difusión de información considerada sensible para la opinión pública, como protestas y saqueos.

Así por ejemplo, el 6 de enero el fotógrafo **Ricardo Cermeño**, del portal *Mundo 24*, habría sido detenido a las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, por tomar fotos durante una protesta que se llevaría a cabo en las puertas del Sebin de los familiares de personas detenidas en ese lugar.

El 4 de febrero la periodista **Diana Moreno** del diario *El Impulso* habría sido retenida por oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana por tomar fotografías del desabastecimiento de un supermercado en la ciudad de Barquisimeto, estado de Lara.

Igualmente, de acuerdo a la información recibida, en Barquisimeto, estado Lara, funcionarios del Sebin detuvieron el 18 de marzo al periodista **Pedro Luis Montilla** por escribir una nota en su blog sobre el caso de 28 mineros desaparecidos en la población de Tumeremo, estado Bolívar. En el centro de detención, el Sr. Montilla habría sido interrogado, su computadora confiscada y luego puesto en libertad.

El 26 de abril, **Reynaldo Mozo**, periodista de *Efecto Cocuyo*, habría sido detenido mientras realizaba la cobertura de una protesta por escasez de comida. Efectivos de la policía del estado Vargas le quitaron el celular, lo esposaron y trasladaron a la comandancia de la policía, “por averiguaciones”, según le dijeron. Tras una hora de detención, fue liberado.

El 8 de junio el activista **Pedro Hernández Oropeza** habría sido detenido luego de difundir un mensaje en la red social *Twitter* en el cual informaba sobre las protestas por la escasez de alimentos y saqueos en la localidad de Aroa, estado Yaracuy. El Presidente Nicolás Maduro habría acusado al activista de ser responsable de los saqueos en esa ciudad.

Los días 23, 24 y 25 de junio, el Sebin interrogó a los periodistas **Román Camacho** de *La Patilla* y **Yosselin Torres** y **Darvinson Rojas** de *El Pitazo*, con el propósito de que los reporteros dieran a conocer el origen de un video filtrado a estos medios en el que un individuo que intentó atacar al Banco Central de Venezuela, justificando su acción “por el hambre que pasa el pueblo”. Los teléfonos celulares de los periodistas habrían sido confiscados.

El 30 de junio, durante protestas por falta de comida y saqueos en la ciudad de Tucupita, capital del estado Delta Amacuro, el reportero gráfico **Oscar Cedeño**, suscrito a la Alcaldía de esa ciudad, habría sido detenido mientras ejercía su labor. Durante estos eventos fueron detenidas 146 personas y el suministro de energía eléctrica de la emisora jesuita *Radio Fe y Alegría* de Tucupita fue suspendido “por órdenes de la gobernadora”, según se informó, con el propósito de detener las transmisiones en vivo que realizaba la emisora sobre los acontecimientos en esa ciudad.

Agresiones a periodistas y medios de comunicación

El 2 de junio individuos armados que serían partidarios del Gobierno habrían amenazado, agredido e incluso robado al menos a 19 periodistas y trabajadores de medios de comunicación mientras realizaban la cobertura de protestas por falta de comida en el centro de Caracas. Ante dichos hechos, los miembros de la fuerza pública ahí presentes no habrían realizado acciones para proteger a los periodistas atacados.

En el mes de junio fueron reportados ataques a la sede de los diarios *El Aragüeño*, *El Caroní*, *El Nacional*. El 20 de junio dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían lanzado un artefacto explosivo a la sede del periódico *El Aragüeño*.

Previamente, el 17 y 14 de junio fueron arrojadas bolsas con excremento en las sedes del diario *El Nacional* y del *Correo del Caroní*, respectivamente.

Censura a medios de comunicación

El 8 de junio el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitió un fallo, en el cual prohibió a los medios digitales "La Patilla" y "Caraota Digital", difundir videos de linchamientos, a través de sus páginas de internet, así como en sus cuentas en redes sociales. En el mismo fallo el TSJ extendió la orden a todos los medios de comunicación del país. En su sentencia N° 429/2016, el Tribunal sostuvo que el derecho de los periodistas "no deben crear zozobra e incertidumbre en la población, ya que el ejercicio de la comunicación social debe contribuir con el desarrollo integral del individuo y de la sociedad".

El Tribunal justificó la decisión en el hecho de que "la transmisión reiterada de los videos de linchamientos podrían exaltar estos hechos contrarios a la esencia misma de la convivencia social a través de las instituciones del Estado".

Escasez de papel de prensa

El 17 de junio el diario *El Siglo de Aragua* suspendió su circulación de sus ediciones impresas por falta de papel periódico, lo mismo ocurrió con otros periódicos. La escasez del papel prensa se debería a los controles estatales para la compra e importación del papel. Este año las versiones impresas de los diarios *La Mañana* del estado Falcón, *Nueva Prensa* del estado Bolívar, *El Carabobeño* del estado de Carabobo, y *El Mío* del estado Lara, salieron de circulación por la misma causa. Otros periódicos, como el *Correo del Caroní*, se habrían convertido en semanario.

Manejo político de las frecuencias para la radiodifusión

Conforme a la información recibida, un alto número de medios de radiodifusión en Venezuela operan con concesiones vencidas desde el año 2014, ante la falta de respuesta a los pedidos de renovación de la licencia para operar realizados a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Como ejemplo de esta situación, según la información recibida, el 10 de junio de 2016 funcionarios de CONATEL, acompañados de la Guardia Nacional Bolivariana ordenaron el cierre de la emisora *La Barinesa*, en el estado Barinas, porque la concesión del medio habría vencido en 2014. Esta medida se ha considerado como una retaliación por contenidos de opinión expresados en la radio.

Sin prejuzgar sobre la veracidad de estas alegaciones, expresamos nuestra profunda preocupación por las alegaciones que indican una serie de restricciones ilegítimas al ejercicio del periodismo y funcionamiento de los medios de comunicación social, las cuales limitarían indebidamente tanto el derecho de estos actores a difundir ideas e informaciones de toda índole, como el derecho de la sociedad venezolana a recibir información relevante. En particular nos preocupan las informaciones sobre varias

situaciones de detención arbitraria y agresión en contra periodistas en ejercicio de su legítima labor. Son igualmente preocupantes las informaciones sobre la suspensión de actividades de medios de prensa en virtud de la escasez de papel o de repetidos problemas en el sistema de licenciamiento. Tales situaciones son aún más graves considerando el contexto de crisis económica y el rol fundamental de los periodistas y de los medios de información en la difusión de información y la promoción del debate público vitales en tal contexto.

De confirmarse, tales situaciones configurarían violaciones al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, consagrado en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Venezuela en 1978 y en el Artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Estas medidas tendrían además un efecto disuasivo y generarían reacciones de autocensura.

En este sentido recordamos que en la Observación General N° 34 sobre el artículo 19, el Comité de Derechos Humanos recalca que “la existencia de medios de prensa y otros medios de comunicación libres y exentos de censura y de trabas es esencial en cualquier sociedad para asegurar la libertad de opinión y expresión y el goce de otros derechos reconocidos por el Pacto. Es una de las piedras angulares de toda sociedad democrática”. El Comité destacó además la obligación de los Estados de adoptar “medidas eficaces de protección contra los ataques destinados a acallar a quienes ejerzan su derecho a la libertad de expresión”. Agrega que “No se puede hacer valer el párrafo 3 [del Artículo 19] como justificación para silenciar a los defensores de la democracia pluripartidista, los principios democráticos y los derechos humanos”.

Igualmente, deseamos hacer referencia a la resolución 21/12 del Consejo de Derechos Humanos sobre la seguridad de los periodistas, que "Condena en los términos más enérgicos todos los atentados y toda violencia contra los periodistas, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la detención arbitraria, así como la intimidación y el acoso" y "exhorta a los Estados a que garanticen la rendición de cuentas llevando a cabo investigaciones imparciales, rápidas y eficaces de tales actos cometidos dentro de su jurisdicción, y a que lleven a sus autores ante la justicia y se cercioren de que las víctimas tengan acceso a un resarcimiento apropiado."

Nos referimos también a la Declaración Conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales adoptada por los Relatores de Naciones Unidas y relatora Especial de la CIDH de 13 de septiembre de 2013. Dicha declaración dispone que “el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. [L]a protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales. Las restricciones desproporcionadas en el acceso al lugar de los hechos, las detenciones y la imputación de cargos por el cumplimiento de las labores profesionales de los y las

reporteras vulnera el derecho a la libertad de expresión. Corresponde a las autoridades restablecer las garantías afectadas y asegurar el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión”.

Asimismo, recordamos que “los Estados tienen una responsabilidad directa bajo las normas internacionales de derechos humanos de respetar la libertad de expresión también tienen la obligación positiva de adoptar medidas eficaces para proteger la libertad de expresión contra ataques de terceros, lo que incluye castigar a los autores de cualquier ataque contra aquellos que ejercen su derecho a la libertad de expresión y creando conciencia sobre la importancia de la libertad de expresión”.

Expresamos seria preocupación por el alegado uso desviado de la facultad estatal de otorgar y renovar licencias y distribuir el papel periódico con el objetivo de alinear editorialmente a los medios de comunicación con el gobierno. La desviación de la potestad estatal de otorgamiento o renovación de licencias atenta contra la libertad de expresión o el control del papel de periódico con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Como ha expresado la CIDH “[l]os medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”. En el igual sentido, la Corte IDH afirmó en el caso *Granier y otros (RCTV) vs. Venezuela* que este tipo de la desviación de poder tiene un impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, no sólo en los trabajadores y directivos del medio afectado, sino además en la dimensión social de dicho derecho, es decir, en la ciudadanía que se ve privada de tener acceso a la información que el medio difunde.

Recordamos también a este respecto la Observación General N° 34 del Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/GC/34) la cual establece que los Estados parte del PIDCP han de garantizar que los marcos legislativos y administrativos por los que se regula a los medios de comunicación sean compatibles con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 19. El Comité indica también que “los Estados partes no deben imponer regímenes de licencia y derechos onerosos a los medios de la radiodifusión y la televisión, incluidas las emisoras comunitarias y comerciales. Los criterios para la aplicación de esos regímenes o el cobro de esas licencias deben ser razonables y objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios, y cumplir por todos los demás conceptos lo dispuesto en el Pacto.”

El texto completo de las normas contenidas en los instrumentos internacionales que nos permitimos recordar y de los estándares internacionales aplicables se encuentra disponible en la página web www.ohchr.org, y puede ser proveído si se solicita.

Teniendo en cuenta la urgencia del caso, agradeceríamos recibir del Gobierno de su Excelencia una respuesta sobre las acciones emprendidas para proteger los derechos de las personas anteriormente mencionadas.

Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones llevadas a nuestra atención. En este sentido, estaríamos muy agradecidos de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:

1. Sírvanse proporcionar información y cualquier comentario que tenga sobre las alegaciones mencionadas.

2. Sírvase indicar si existen quejas e investigaciones en curso respecto de los hechos denunciados.

3. Sírvase proporcionar información detallada sobre la legislación que autoriza la detención, interrogatorio y confiscación de material de periodistas y trabajadores de medios de comunicación que cubren protestas y hechos de interés público. En particular, agradecemos información sobre la normativa que protege el derecho de los periodistas a la confidencialidad de sus fuentes.

4. Sírvase indicar qué medidas ha adoptado el Estado para garantizar la integridad y seguridad personal de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, así como la existencia de un clima propicio y seguro para el ejercicio del periodismo en el país.

5. Sírvase indicar qué medidas ha adoptado el Estado para garantizar el acceso a papel de periódico por parte de los medios de comunicación que se habrían visto forzados a salir de circulación o reducir su formato en Venezuela.

6. Sírvase indicar la adecuación con relación a los estándares internacionales para la libertad de expresión del fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) prohibiendo a los medios digitales "La Patilla" y "Caraota Digital" difundir videos de linchamientos.

7. Sírvase informar acerca de los procedimientos adoptados y las razones para el cierre de la radio *La Barinesa* el último 10 de junio de 2016 y la adecuación de tales medidas con los estándares internacionales para la libertad de expresión.

8. Sírvase indicar la proporción de medios de comunicación que tienen pendiente la renovación de su licencia y la adecuación de los procedimientos de licenciamiento existentes en relación a los estándares internacionales para la libertad de expresión. En particular, sírvase informar sobre los procedimientos adoptados en caso de expiración de la licencia.

Agradeceríamos recibir una respuesta del Gobierno de Su Excelencia a la mayor brevedad posible. Garantizamos que la respuesta recibida del Gobierno de Su Excelencia será incluida en el informe periódico que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Quisiera instar al Gobierno de su Excelencia a que en la brevedad adopte todas las medidas necesarias para asegurar el respeto, garantizar y proteger el derecho de toda persona a la libertad de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Considerando la seriedad de las alegaciones, tenemos la intención de expresar públicamente nuestras preocupaciones el próximo jueves (4 de agosto de 2016) por medio del comunicado de prensa en anexo. El comunicado indica que hemos estado en contacto con el Gobierno de Su Excelencia para aclarar las cuestiones relevantes.

Aprovechamos la oportunidad para expresar a Su Gobierno el testimonio de nuestra más alta y distinguida consideración.

David Kaye

Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión

Edison Lanza

Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights